

**JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**NÚMERO: \*\*\*\***

**ACTOR: \*\*\*\***

**AUTORIDAD DEMANDADA:** “PROACTIVA  
MEDIO AMBIENTE CAASA”, S.A. DE C.V.

**TERCERA INTERESADA:** COMISIÓN  
CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, a siete de  
diciembre de dos mil dieciocho.

**VISTOS**, para resolver, los autos del juicio de  
nulidad número \*\*\*\* y

**RESULTANDO:**

I. Mediante escrito presentado el *diecinueve de octubre de dos mil diecisiete* en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, remitido a esta Sala al día hábil siguiente, \*\*\*\* demandó de la concesionaria “Proactiva Medio Ambiente CAASA”, S.A. de C.V., la nulidad del acto administrativo que precisó en los siguientes términos:

“...II.- RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO  
QUE SE IMPUGNA:

1.- Recibo de pago número \*\*\*\*, emitido por PROACTIVA medio ambiente CAASA, S.A. DE C.V. en fecha 12 DE OCTUBRE DE 2017, a nombre del suscrito y con domicilio del cobro en la \*\*\*\*”.

II. Por auto de fecha *veinticinco de octubre de dos mil diecisiete*, se admitió a trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó emplazar a la concesionaria demandada y a la tercera interesada Comisión Ciudadana de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes [CCAPAMA].

III. Mediante proveído de fechas *veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete*, se tuvo contestando la demanda a la Concesionaria demandada así como a la tercera llamada a juicio, admitiéndose las pruebas ofrecidas por éstas, ordenándose correr traslado a la parte actora a fin de que realizara ampliación de demanda.

IV. Según auto de fecha *dieciocho de enero de dos mil dieciocho*, se tuvo a la parte actora presentando ampliación de demanda.

V. En fecha *diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho* se declaró por perdido el derecho de las autoridades demandadas para contestar la ampliación de demanda presentada y se señaló fecha para la audiencia de juicio.

VI. La audiencia de juicio fue celebrada el *dieciocho de octubre de dos mil dieciocho*, donde se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, se abrió y agotó el periodo de alegatos, para finalmente citar el asunto a sentencia definitiva, la que hoy se dicta bajo los siguientes:

#### **CONSIDERANDOS:**

##### **PRIMERO. COMPETENCIA DE LA SALA ADMINISTRATIVA.**

Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver del presente juicio, conforme a los artículos 51, segundo párrafo, y 52, último párrafo, de la Constitución Local; 33 A, y 33 F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, primer párrafo, y 2, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso



Administrativo para el Estado, toda vez que se impugna una resolución administrativa emitida por la concesionaria de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado o saneamiento y su reuso en el Municipio de Aguascalientes, actuando como autoridad.

### **SEGUNDO. LA EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.**

Los actos impugnados en el escrito inicial de demanda y en el de ampliación de ésta, se encuentran debidamente acreditados con los recibos de números \*\*\*\* y \*\*\*\* emitidos por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA, S.A. de C.V.", con fechas *doce de octubre y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente*, visibles a fojas *veinticinco y ciento cuarenta y cuatro* de los autos.

Resoluciones en las que se determina y exige a la parte actora \*\*\*\*, por lo que ve al primero de los recibos señalados el pago de \$7,828.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), por 10 meses de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en el bien inmueble ubicado en la \*\*\*\*, registrado con cuenta \*\*\*\*, siendo el último mes facturado septiembre de dos mil diecisiete (M-09-2017) y respecto al segundo, la cantidad de \$8,805.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.) por doce meses de adeudo del citado servicio siendo el último mes facturado noviembre de dos mil diecisiete (M-11-2017).

En el entendido de que, una vez que fue analizado en su contenido el último recibo, se desprende que dentro de éste se contiene el primero de los recibos multicitados (\*\*\*\*) al actualizarse el cobro del suministro de agua potable.

Probanzas que al provenir de las partes y sin que exista objeción alguna, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 335, 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, según su numeral 47 para tener por acreditados los actos administrativos impugnados.

### **TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.**

La concesionaria demandada afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 26, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que esta Sala Administrativa es incompetente para conocer del presente asunto, esto dice: a) porque el recibo de pago impugnado no lo realiza en funciones de autoridad, y b) porque la naturaleza de la controversia no es administrativa ni fiscal, sino mercantil.

Refiere que el recibo de pago no lo emite en funciones de autoridad, porque si bien es prestador del servicio público de agua potable en virtud de la concesión que le fue otorgada por el Municipio de Aguascalientes, lo cierto es que la relación jurídica que tiene con el usuario deriva de una relación contractual —contrato de suministro—, por lo que su relación es de coordinación y no de supra a subordinación, razón por la que no se encuentra actuando en funciones de autoridad.

Bajo esa premisa, refiere que el requerimiento de pago no es un acto de autoridad, dado que no proviene de una relación de supra a subordinación, ni se emite de manera unilateral por parte de la concesionara, sino que tiene como base el incumplimiento a la obligación de pago derivada del contrato de



suministro que celebró con el usuario, en una relación de coordinación.

Como sustento de su afirmación, invoca la tesis de jurisprudencia número P./J. 92/2001, de la novena época, con número de registro: 189353, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: *“AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.”*

Agrega que conforme a lo previsto en los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio, la naturaleza de la controversia derivada del suministro de agua potable no es administrativa ni fiscal, sino mercantil, por lo que cualquier controversia suscitada entre las partes derivadas de ese tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de conformidad con el numeral 104, fracción II, constitucional.

Como sustento de su afirmación, invoca las siguientes tesis aisladas 2a. XLII/2015 (10a.) —con número de registro: 2009790— y 2a. CIX/2013 (10a.) —con número de registro: 2005149—, ambas de la décima época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro indican, respectivamente:

*“COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON*

*IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL  
[INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA  
TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (\*)].”*

*“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA  
ELÉCTRICA LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE  
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS  
CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA  
MERCANTIL.”*

Esta Sala Administrativa resolvió en pleno mediante interlocutoria de *veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete*, que no se actualizan las citadas causales de improcedencia, por lo que ya fueron motivo de decisión de este órgano jurisdiccional y por tanto existe cosa juzgada respecto a ello.

En efecto, por virtud de la institución de la cosa juzgada, los temas definidos por un órgano jurisdiccional en una resolución contra la que no procede medio de defensa ordinario alguno no son susceptibles de modificarse, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica.

En la especie, el recurso de reclamación fue interpuesto contra el auto de admisión de demanda, en tal medio de defensa esta Sala definió en Pleno, que no se configuraban los motivos de improcedencia expuestos por la concesionaria demandada, de lo que se sigue, que tal determinación constituye cosa juzgada y, por ende, las invocadas causales ya fueron examinadas.

En la inteligencia de que no impide llegar a esta conclusión la circunstancia de que los argumentos por los que la demandada concluya se actualizan las causales de improcedencia no sean exactamente iguales, pues mientras exista identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada.

**CUARTO.** En virtud de que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia invocadas por la demandada, ni



esta Sala advierte que se actualice alguna de oficio, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer la accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias.

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

#### **QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.**

Afirma la parte actora en el concepto de nulidad PRIMERO del escrito inicial de demanda, en esencia, que resulta ilegal la resolución impugnada, ya que se encuentra basada en cuotas o tarifas que no fueron publicadas tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en el Estado, como lo exige el artículo 101 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes.

El argumento es **FUNDADO**, siendo preferente su análisis, por ser el que mayor protección brinda al actor.

De una interpretación sistemática e integral de los artículos 3°, fracción XIII, 23, 25, fracción II, 27, fracción I, 29, fracción III, 34, fracción IV y 101 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes; 3, 6, fracción XII, y 16, fracción III, del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, se



obtiene que:

1. El prestador de los servicios, en este caso, la concesionaria PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. de C.V., **aplicará para los cobros de los servicios** de agua potable, alcantarillado y saneamiento, **las cuotas y tarifas** que al respecto autorice el Consejo Directivo del organismo operador municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes —CCAPAMA—.

2. Cuotas y tarifas, que para su eficacia, el Director General del citado organismo operador municipal, **deberá publicar** en el **Periódico Oficial del Estado** y en uno de los **diarios de mayor circulación en la entidad**.

Luego, la concesionaria Proactiva Medio Ambiente para determinar la cantidad a pagar por parte de los usuarios, necesariamente deberá tener como base las tarifas y cuotas autorizadas y publicitadas en los términos que lo exige la norma; circunstancia que en la especie no acontece.

Afirmación que se hace, ya que la concesionaria **no demostró** que haya efectuado las publicaciones en la forma que son exigidas dentro de los medios de comunicación indicados, respecto a las tarifas aplicadas a los meses que facturó en el recibo impugnado, **ya que si bien dio contestación a la demanda entablada en su contra, sin embargo no acreditó que hubiere realizado las publicaciones en los medios de difusión ordenados por la norma, ya que por lo que ve a las correspondientes al diario de mayor circulación en el Estado, exhibió diversas publicaciones de ese medio de difusión, sin embargo se trata de copias simples las que carecen de valor alguno al ser simples.**

**Por lo que ve a las correspondientes publicaciones**





de **Periódico Oficial del Estado**, dio parcial cumplimiento a ello, puesto que se advierte en el escrito de contestación de demanda, específicamente a foja *ochenta y uno* de los autos, donde la concesionaria demandada inserta un cuadro donde señala en forma incompleta las fechas de publicación de dicho medio de difusión, puesto que omite señalar las correspondientes a los meses de enero y septiembre de dos mil diecisiete, sin que tampoco ofertara formalmente prueba alguna para acreditar tales extremos.

De ahí que se presume la inexistencia de las publicaciones en los dos medios de difusión que ordena la norma.

Lo anterior es así, ya que dentro de la clasificación de los actos se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. De manera que, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.

En el presente caso, el acto negativo que se le atribuye a la concesionaria, versa exclusivamente en que basa su resolución en tarifas que no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en la entidad; de manera que, a fin de desvirtuar el hecho negativo que se le atribuye, estaba obligada a exhibir la publicación de todas las cuotas o tarifas que sirvieron de base para la determinación del monto a pagar por parte del usuario.

Esto porque la negativa simple de los actos por parte del actor, la libera de la necesidad de probarlos, pues lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado, de tal suerte que la carga de probar recae en la concesionaria, porque la

determinación del adeudo es un hecho que se le imputa de manera directa, por ser ella la facultada para aplicar las cuotas o tarifas legalmente válidas; de lo que se sigue que, estaba obligada conforme al artículo 25 primer párrafo, *in fine*, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, no solo a contestar ese hecho, sino a probar la razón de su respuesta, sin que así lo hubiere hecho como ya se dijo.

Da sustento a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia I.7o.A. J/45, de la novena época, localizable con número de registro: 168192, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dice:

**“CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA CONSERVA EN CUSTODIA.**

*El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de nulidad, establece que el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo opera un principio de excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadas mediante el acompañamiento en autos de los documentos que las contengan, cuando éstos obren en los expedientes administrativos que aquélla conserva en custodia.”*

También, es aplicable la tesis aislada VI.1o.230 K, de la octava época, con número de registro: 208122, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente:



**“ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS.** Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables.”

Al no haber demostrado la concesionaria que las tarifas o cuotas que tomó como base para determinar la cantidad a pagar por parte del usuario, se hubiesen publicado en un periódico de mayor circulación en la entidad, como lo exige la norma, dado que las que exhibe se trata de copias simples que no tiene valor probatorio pleno, lo que procede es declarar la **nulidad lisa y llana** del acto impugnado.

No obsta para lo anterior, lo expuesto por Proactiva Medio Ambiente en su contestación de demanda, en el sentido de que la publicación de las cuotas o tarifas no le corresponde a ella, por lo que no está obligada a demostrar la existencia de dichas publicaciones, pues de acuerdo a la Ley de Agua para el Estado, es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes la facultada para determinar y aprobar las tarifas o cuotas que los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado deben de pagar, y por ende, el obligado en publicarlas.

Ello es así, porque la concesionaria pasó por alto que el argumento en análisis no versa en quién es la facultada para determinar y aprobar las tarifas que los usuarios de agua potable deben de pagar, y por ende, quien tiene la obligación de hacer la publicación de dichas cuotas; sino si el acto impugnado

fue emitido o no con base en una tarifa que se haya publicado en términos de Ley.

Luego, si la concesionaria es quien determina la cantidad a pagar por parte del usuario, con base a las cuotas o tarifas autorizadas y publicadas por el organismo operador municipal; se concluye que, necesariamente está obligada a conocer y exhibir cuando sea requerida para ello, la publicación de las cuotas o tarifas que tomó como base para el dictado de su resolución.

**SEXTO.** Al ser fundada la acción intentada, según lo asentado en el considerando anterior, se actualiza la causal de anulación prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, por lo que con fundamento en el diverso numeral 62, fracción II, de ese mismo cuerpo de leyes, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación contenida en el recibo número \*\*\* emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA, S.A. de C.V.", el *catorce de diciembre de dos mil diecisiete*, visible a foja *ciento cuarenta y cuatro* de los autos.

Resolución en la que se determina y exige a la parte actora \*\*\*\* el pago de \$8,805.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), por 12 meses de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en el bien inmueble ubicado en la \*\*\*\*, registrado con cuenta \*\*\*\*, siendo el último mes facturado noviembre de dos mil diecisiete (M-11-2017).

Y como **consecuencia de la nulidad anteriormente expuesta, de igual forma, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA del recibo de folio \*\*\*\*, emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA, S.A. de C.V.", el doce de octubre de dos**



*mil diecisiete*, visible a foja *veinticinco* de los autos, lo anterior ya que éste recibo se encuentra contemplado dentro del recibo cuya nulidad ha sido declarada en párrafos anteriores, además de que los datos que se contienen en ambos recibos, como el nombre a cargo de quien se expiden, el domicilio y el número de la cuenta, son idénticos, a virtiéndose solamente actualizaciones a la fecha de emisión del que cuenta con folio \*\*\*\* declarado nulo, conforme a los periodos de cobro contenidos en ambos.

Por las razones que se informan en este fallo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, fracción II, y 62, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

**PRIMERO.** La acción es procedente la acción ejercida por el actor.

**SEGUNDO.** Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación contenida en el recibo número \*\*\*\* emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA, S.A. de C.V.", el *catorce de diciembre de dos mil diecisiete*, visible a foja *ciento cuarenta y cuatro* de los autos, según lo expuesto en el considerando QUINTO de la presente resolución.

**TERCERO.** Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA del recibo \*\*\*\*, como consecuencia de la nulidad lisa y llana del recibo citado en el resolutivo que antecede, ante las razones expuestas en el considerando SEXTO de la presente sentencia.

**CUARTO.** NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió ésta Sala Administrativa del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los MAGISTRADOS ENRIQUE FRANCO MUÑOZ, RIGOBERTO ALONSO DELGADO Y ALFONSO ROMÁN QUIROZ, siendo

ponente el segundo de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de diez de diciembre de dos mil dieciocho. Conste.-

\*\*



La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES:

**CERTIFICA**

Que la presente impresión contenida en **catorce** páginas de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número **\*\*\*\***, promovido por **\*\*\*\*** en contra de **“PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CASA”, S.A. DE C.V. y COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los **siete días del mes de diciembre de dos mil dieciocho**.- Doy fe.-

**LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE  
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

**LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES.**